

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

A LA MESA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a instancia del senador Carles Mulet (Compromís) y de acuerdo con lo que establecen los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación en la Comisión que corresponda, de la siguiente **Moción sobre los bebés robados**.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el informe *“Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebés robados”* Amnistía Internacional denuncia la falta de respuesta por parte del Estado a quienes llevan décadas buscando los llamados “bebés robados”, lo que acrecienta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, según reconocen organismos internacionales.

Este informe se ha elaborado en base a una investigación documental y sobre el terreno realizada por Amnistía Internacional España entre diciembre de 2018 y marzo de 2021. La investigación se ha desarrollado a nivel estatal, si bien ha prestado especial atención a algunas Comunidades Autónomas, en particular a Andalucía, Comunidad de Madrid, País Valenciano, Cataluña y País Vasco. El criterio para la selección de estas regiones responde a que estas Comunidades Autónomas concentran más del 81% de las diligencias de investigación emprendidas por la Fiscalía General del Estado desde el año 2011.

Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los conocidos como “bebés robados”.

La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado. Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

Amnistía Internacional ha recabado testimonios y documentado denuncias de sustracción ilegal de menores que dan cuenta de hechos que podrían constituir desaparición forzada, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el momento en que existen motivos razonables para sospechar que una persona ha podido ser víctima de desaparición forzada, se origina para el Estado una obligación absoluta de investigar hasta esclarecer los hechos y conocer la verdad. En el caso de los niños y niñas desaparecidos, esta obligación no cesa hasta garantizar la posibilidad real y legal para la víctima de restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares. El derecho internacional de los derechos humanos también dispone que son víctimas de desaparición forzada, además de las personas desaparecidas, aquellas otras que sufren un perjuicio directo como consecuencia de esa desaparición, como sus familiares.

Amnistía Internacional ha observado también que las acciones de los distintos poderes del Estado español, y en los distintos niveles de gobierno, no han proporcionado respuestas a las víctimas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. El poder judicial ha archivado la mayoría de las denuncias, en algunos casos sin haber llevado a cabo investigación alguna, alegando la prescripción de los hechos. En el caso concreto de la Fiscalía General del Estado, sus esfuerzos y numerosas investigaciones emprendidas han arrojado escasos resultados materiales. El poder ejecutivo ha puesto en marcha algunos dispositivos orientados a asistir a las víctimas, pero con un alcance limitado, carentes de competencias y objetivos para esclarecer los hechos y llevar a término los procesos de búsqueda. Finalmente, el poder legislativo, a nivel estatal, no ha promulgado legislación específica que recoja gran parte de las medidas solicitadas por las víctimas. A nivel autonómico han sido diversas las iniciativas legislativas aprobadas, aunque dicha organización no ha podido constatar que su implementación esté suponiendo una ayuda efectiva para las víctimas.

Además, a lo largo de la investigación, han podido constatar una “ideología de género” franquista que explica y da contexto a los hechos denunciados como sustracciones ilegales de bebés. Comienza en la posguerra, con una represión que incide de forma particular en la mujer represaliada, y continúa durante el franquismo, a través del control sobre la mujer, cuya única función es ser madre, y a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión, también respecto de su propia maternidad.

Ideología contra la mujer

Así mismo, desde el fin de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que sometían y limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los y las menores, y permitieron que la adopción fuera un negocio entre particulares hasta 1987. También hasta 1963 se publicaron numerosos informes médicos que pretendían demostrar que la mortalidad infantil era mayor cuando la madre era pobre, trabajadora, o madre soltera. Un entramado legal e ideológico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos.

La desconfianza hacia las madres, el discurso de que quienes no superan la muerte de su bebé pueden terminar locas, se ha prolongado en el tiempo, y sigue teniendo especial impacto en las mujeres que, todavía hoy, buscan a sus hijos e hijas: no se las cree, se las considera locas, e incluso se les achaca haberse arrepentido de haber entregado a sus bebés en adopción.

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

A Ruth Puertas, presuntamente le sustrajeron su bebé en 1993, se trata del último caso documentado por la organización. A lo largo de años de búsqueda solo ha encontrado falta de información, falta de respuestas, y un cuestionamiento constante a su testimonio. *"Yo quiero verdad, quiero que se sepa que no estamos locas"*.

No es un tema del pasado

Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de su investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han señalado mecanismos internacionales como el *Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, o el *Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas*.

Momento histórico

El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.

En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Congreso apruebe una *Ley sobre bebés robados* destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

MOCIÓN

La Comisión de Justicia insta al Gobierno a:

PRIMERO.- Promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de las personas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad. Esta ley, entre otras cuestiones, debería:

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

- establecer un mecanismo de coordinación y canalización de estos procesos de búsqueda, que deberá ser implementado por el poder ejecutivo;
- establecer una base de datos centralizada a nivel estatal, que integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados y de todas las víctimas y familiares que así lo deseen;
- establecer las bases de una asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda.

SEGUNDO.- Reformar el Código Penal para asegurar que el cómputo del plazo de prescripción en casos de desaparición forzada no comience sino hasta que se determine la suerte y paradero de la persona desaparecida. Muy especialmente, para garantizar que dicho cómputo, en el caso de los ‘bebés robados’, no comienza sino hasta que a la víctima se le garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y, en su caso, los lazos familiares.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En l'informe **“Temps de veritat i de justícia. Vulneracions de drets humans en els casos de “bebès robats”** Amnistia Internacional denuncia la falta de resposta per part de l'Estat als qui porten dècades buscant els anomenats “bebès robats”, la qual cosa augmenta un patiment psicològic que arriba al llindar de la tortura i altres maltractaments, segons reconeixen organismes internacionals.

Aquest informe s'ha elaborat sobre la base d'una investigació documental i sobre el terreny realitzada per Amnistia Internacional Espanya entre desembre de 2018 i març de 2021. La investigació s'ha desenvolupat a nivell estatal, si bé ha prestat especial atenció a algunes Comunitats Autònomes, en particular a Andalusia, Comunitat de Madrid, País Valencià, Catalunya i País Basc. El criteri per a la selecció d'aquestes regions respon al fet que aquestes Comunitats Autònomes concentren més del 81% de les diligències d'investigació empreses per la Fiscalia General de l'Estat des de l'any 2011.

Al llarg de més de 50 anys, des de finals de la Guerra Civil fins als 90, milers de persones van poder ser objecte de desaparició forçada, o de sostracció i substitució de les seues identitats. Es va vulnerar, també, el dret a la protecció de la vida familiar, el dret a la identitat, a la nacionalitat, al nom, i a les relacions familiars sense ingerències il·lícites. Són els coneguts com a “bebès robats”.

La resposta per part de l'Estat ha anat des de l'autoria o complicitat en els primers anys, fins a l'actual atenció desinteressada, inadequada i insuficient als milers de processos de cerca iniciats per persones que no coneixen la seua identitat ni la de la seua família biològica; o per mares i pares, germans o germanes, que desconeixen la sort i parador dels seus fills o filles, o familiars.

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

Les sostraccions il·legals denunciades s'haurien produït primer en presons, i després en hospitals, maternitats, cases bressol, centres de beneficència, en alguns casos directament gestionats per congregacions religioses, que mancaven d'una adequada supervisió per part de l'Estat. Amnistia Internacional ha constatat com bebès van arribar a ser lliurats a famílies de Mèxic o Xile, sent registrats com a fills i filles biològics. La ideologia de gènere franquista que va posar el focus en el control de les dones, la seua sexualitat i la seua maternitat, va imposar la creació de lleis, algunes vigents fins a finals dels 90, que van permetre emparar la sostracció il·legal de bebès.

Amnistia Internacional ha recaptat testimonis i documentat denúncies de sostracció il·legal de menors que donen compte de fets que podrien constituir desaparició forçada, de conformitat amb el dret internacional dels drets humans. Des del moment en què existeixen motius raonables per a sospitar que una persona ha pogut ser víctima de desaparició forçada, s'origina per a l'Estat una obligació absoluta d'investigar fins a esclarir els fets i conèixer la veritat. En el cas dels xiquets i xiquetes desapareguts, aquesta obligació no cessa fins a garantir la possibilitat real i legal per a la víctima de restablir la seua identitat i, en el seu cas, els llaços familiars.

El dret internacional dels drets humans també disposa que són víctimes de desaparició forçada, a més de les persones desaparegudes, aquelles altres que pateixen un perjudici directe a conseqüència d'aqueixa desaparició, com els seus familiars.

Amnistia Internacional ha observat també que les accions dels diferents poders de l'Estat espanyol, i en els diferents nivells de govern, no han proporcionat respostes a les víctimes conforme als estàndards internacionals de drets humans. El poder judicial ha arxivat la majoria de les denúncies, en alguns casos sense haver dut a terme cap investigació, al·legant la prescripció dels fets. En el cas concret de la Fiscalia General de l'Estat, els seus esforços i nombroses investigacions empreses han llançat escassos resultats materials. El poder executiu ha posat en marxa alguns dispositius orientats a assistir a les víctimes, però amb un abast limitat, mancats de competències i objectius per a esclarir els fets i portar a terme els processos de cerca. Finalment, el poder legislatiu, a nivell estatal, no ha promulgat legislació específica que reculli gran part de les mesures sol·licitades per les víctimes. A nivell autonòmic han sigut diverses les iniciatives legislatives aprovades, encara que aquesta organització no ha pogut constatar que la seua implementació estiga suposant una ajuda efectiva per a les víctimes.

A més, al llarg de la investigació, han pogut constatar una "ideologia de gènere" franquista que explica i dona context als fets denunciats com a sostraccions il·legals de bebès. Comença en la postguerra, amb una repressió que incideix de manera particular en la dona represaliada, i continua durant el franquisme, a través del control sobre la dona, l'única funció de la qual és ser mare, i a la qual es priva d'autonomia i capacitat de decisió, també respecte de la seua pròpia maternitat.

Ideologia contra la dona

Així mateix, des de la fi de la Guerra Civil es van aprovar lleis, moltes d'elles vigents fins a finals dels 90, que sotmetien i limitaven els drets de les dones, regulaven el registre dels i les menors, i van permetre que l'adopció fóra un negoci entre particulars fins a 1987. També fins a 1963 es van publicar nombrosos informes mèdics que pretenien demostrar que la mortalitat infantil era major quan la mare era pobra, treballadora, o mare soltera. Un entramat legal i ideològic en el qual van poder emparar-se aquestes violacions de drets humans.

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

La desconfiança cap a les mares, el discurs que els qui no superen la mort del seu bebè poden acabar boges, s'ha prolongat en el temps, i continua tenint especial impacte en les dones que, encara hui, cerquen als seus fills i filles: no se les creu, se les considera boges, i fins i tot se'ls atribueix haver-se penedit d'haver lliurat als seus bebès en adopció.

El cas de Ruth Puertas, a qui presumptament li van sostraure el seu bebè en 1993, és l'últim cas documentat per l'organització. Al llarg d'anys de cerca només ha trobat falta d'informació, falta de respostes, i un qüestionament constant al seu testimoniatge. "*Jo vull veritat, vull que se sàpia que no estem boges*".

No és un tema del passat

Per a Amnistia Internacional, no es tracta d'una violació de drets humans del passat, els seus efectes no han cessat i persisteixen avui. Si alguna cosa ha pogut constatar Amnistia Internacional al llarg de la seua investigació és el profund dolor que suporten les famílies i persones immerses en aquests processos de cerca, incrementat per la falta de respostes i la impunitat. Aquest patiment moral i psicològic pot arribar a aconseguir el llindar de la tortura i altres maltractaments, tal com han assenyalat mecanismes internacionals com el *Tribunal Europeu de Drets Humans*, o el *Grup de Treball sobre desaparicions forçades de Nacions Unides*.

Moment històric

L'Estat espanyol ha d'adoptar mesures amb un enfocament global per a donar resposta a aquests processos de cerca íntegrament, i proporcionar de manera proactiva acompanyament a les víctimes. Això requereix que totes les autoritats implicades garantisquen mecanismes adequats d'accés a la informació, rendició de comptes, així com suport jurídic i psicològic.

En aquests moments estem davant d'una oportunitat històrica per a impulsar l'esclariment efectiu d'aquestes violacions de drets humans. Esperem que el Congrés approve una *Llei sobre bebès robats* destinada a la cerca i identificació de xiquets i xiquetes; que l'Executiu garantisca una assistència integral, tant jurídica com psicosocial per a les víctimes i es reconega públicament l'impacte que aquest tipus de violència ha tingut específicament contra les dones; i que des de tribunals i fiscalia s'impulsen investigacions exhaustives i independents per a esclarir els fets.

Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal

Per tot l'exposat, presentem la següent,

MOCIÓ

La Comissió de Justícia insta al Govern a:

PRIMER.- Promulgar una llei específica destinada a la cerca i identificació de les persones que podrien haver sigut víctimes d'apropiació, desaparició forçada i/o substitució d'identitat. Aquesta llei, entre altres qüestions, deuria:

- establir un mecanisme de coordinació i canalització d'aquests processos de cerca, que haurà de ser implementat pel poder executiu;
- establir una base de dades centralitzada a nivell estatal, que integre mostres genètiques de tots els casos que hagen sigut denunciats i de totes les víctimes i familiars que així ho desitgen;
- establir les bases d'una assistència integral a les víctimes, amb serveis d'orientació jurídica, i acompanyament psicosocial en totes les fases del procés de cerca.

SEGON.- Reformar el Codi Penal per a assegurar que el còmput del termini de prescripció en casos de desaparició forçada no comence sinó fins que es determine la sort i parador de la persona desapareguda. Molt especialment, per a garantir que aquest còmput, en el cas dels 'bebès robats', no comença sinó fins que a la víctima se li garanteix la possibilitat real i legal de restablir la seua identitat i, en el seu cas, els llaços familiars.

Palacio del Senado, 16 de marzo de 2021

Carles Mulet Garcia



Fdo: Carles Mulet Garcia
Fecha: 16/03/2021



Fdo: María Pilar González Modino
Fecha: 16/03/2021